

Julio SEGURA: *La industria española y la competitividad*, Biblioteca de Economía, Madrid, Espasa-Calpe, 1992, 95 páginas, 850 pesetas.

Como es bien sabido, el déficit comercial es un rasgo estructural de la economía española. En 1991 ese desequilibrio alcanzó nada menos que 3,4 billones de pesetas, el 6,3% del PIB, y es responsable de que España registre uno de los mayores déficit corrientes de toda la OCDE. Las razones que lo explican son diversas: la escasa dotación de recursos naturales y muy especialmente energéticos, el fuerte crecimiento de las importaciones desde la incorporación a la CE y, sobre todo, la escasa competitividad internacional de las exportaciones españolas. Factores explicativos de esta última son la tradición proteccionista, que ha permitido a la industria española disponer, hasta 1986, de un mercado interno casi cautivo, la escasa dimensión media de las empresas, la carencia relativa de infraestructuras, la apreciación de la peseta y la virtual ausencia de políticas microeconómicas de fomento de las ventas al exterior.

Este pequeño libro aborda esas cuestiones. Recoge el discurso de recepción en la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas que pronunció, en febrero de 1992, el profesor Segura, catedrático de Teoría Económica de la Universidad Complutense de Madrid y director de la Fundación Empresa Pública, así como la contestación del también catedrático Luis Angel Rojo. *La industria española y la competitividad* es una publicación bienvenida y oportuna. Hay que alegrarse de su aparición porque Segura da muestras aquí, como en todos sus escritos, de sus habituales claridad de ideas, orden expositivo y precisión conceptual, que reflejan una cabeza bien amueblada y una notable capacidad pedagógica. Hay que congratularse también, en mi opinión, de que sean objeto de publicación las reflexiones del autor, que es uno de los pocos grandes economistas españoles que no aplauden a rabiar la política económica del gobierno y que no ensalzan

sistemáticamente el libre mercado, como dejó bien claro en el discurso de recepción del Premio Rey Juan Carlos de Economía en 1990 (publicado, por ejemplo, en la *Revista de Economía*, n.º 7, 4.º trimestre de 1990). Por añadidura, la aparición del libro no puede ser más oportuna, ya que se produce en pleno debate sobre el plan de convergencia económica con la CE, sobre el que el profesor Segura tiene y tendrá seguramente mucho que decir.

Puede resumirse las tesis centrales del discurso de Segura en las dos siguientes:

- \* la competitividad no es sólo una cuestión de costes y ni siquiera de precios, ya que la transmisión de costes a precios puede no ser automática y porque existen factores de competitividad no ligados a los precios (diseño, marcas, servicios posventa, comercialización, etcétera);
- \* la falta de competitividad de la industria española obedece en gran parte a una inadecuada combinación de las políticas macroeconómicas, de demanda u horizontales y a la inexistencia de políticas microeconómicas, de oferta o verticales de fomento de las exportaciones.

El primer punto es poco menos que evidente, pese a que todavía muchos sectores empresariales y del gobierno se empeñan en considerar que la competitividad es exclusivamente un problema de costes. El segundo aspecto tiene más interés, porque es bastante más polémico.

Para el autor, la *política monetaria* del gobierno es excesivamente restrictiva y arroja pobres resultados, ya que se manifiesta en muy elevados tipos de interés y porque ni siquiera ha sido capaz de reducir el diferencial de inflación con la CE en el sector servicios, más protegido de la competencia exterior que las otras actividades económicas. Como resultado de esa política, se ha apreciado la peseta, transferido rentas al sector servicios y se ha producido un alto coste en términos de desempleo. En cuanto a la *política fiscal*, Segura considera que es insuficientemente restrictiva y que el sistema impositivo debería penalizar más el consumo y menos el ahorro y la inversión. La *política cambiaria* es objeto de una fuerte crítica. El autor entiende, acertadamente a mi juicio, que el diferencial de tipos de interés, provocado por las necesidades de financiación del déficit público en condiciones de política monetaria restrictiva y que se ha manifestado en fuertes entradas de capital extranjero, así como el manejo del tipo de cambio para apoyar la lucha contra la inflación, han apreciado excesivamente la peseta, lo que ha abaratado las importaciones y desanimado a las exportaciones de bienes y servicios, al dar una imagen de carestía que tiene efectos duraderos sobre las exportaciones de mercancías y los ingresos por turismo. El autor es partidario de un realineamiento de la peseta cuando ésta ingrese en la banda estrecha del mecanismo de cambios del Sistema Monetario Europeo, lo que mejorará la competitividad y dará mayor holgura a la política monetaria. La *política de rentas*, en su opinión, depende de la concertación entre los agentes sociales y sólo se aplica cuando ésta es posible.

Una de las críticas principales que Segura dirige a la política económica del gobierno es que éste considera que la mejor política industrial es la que no existe, es decir, la que se encomienda exclusivamente al mercado. Echa en falta un mayor crecimiento de los

gastos en investigación y desarrollo, que se sitúan en un escaso 1% del PNB, una selección de sectores tecnológicamente prioritarios y una corrección de los estrangulamientos del sistema ciencia-tecnología, a lo que sin duda podría contribuir una mayor relación entre empresas y universidades. Otras medidas de política industrial que parecen, a todas luces, imprescindibles y que el gobierno se resiste, sin embargo, a adoptar son el fomento de la concentración del capital industrial y la promoción de la internacionalización empresarial, de la calidad y de la formación de la mano de obra.

En suma, temas todos ellos de enjundia, que Segura trata con el rigor habitual en sus escritos y con argumentos de peso en un texto de lectura imprescindible para quienes deseen conocer las insuficiencias y las alternativas de la política económica actual.

Por último, cabe hacer algunos comentarios críticos. En primer lugar, quizá sea necesaria la pregunta ¿competitividad, para qué? En otros términos, competitividad como fin o competitividad como medio. Las declaraciones del gobierno sugieren que apuesta por la primera opción, como si la competitividad fuese el remedio de todos los males. El propio Segura nada dice explícitamente al respecto. Quizá sea necesario recordar que la competitividad, por sí sola, es de escasa utilidad si no se utiliza como instrumento de reindustrialización. La experiencia de países como Japón, Alemania, Corea del Sur y otros parece indicar que es extraordinariamente eficaz emplear los sectores exportadores de la industria ligera como palanca para diversificar el tejido productivo hacia actividades más intensivas en capital y tecnología. Tarea de especial importancia en España, en donde la insuficiencia de la producción de bienes de equipo y la desindustrialización de los últimos años hacen imperioso ese tipo de política industrial.

En segundo lugar, el autor señala que

hay quienes opinan que el déficit público debe desaparecer en dos años —e incluso quienes, en aras de una supuesta libertad individual, desean que el déficit cero sea un principio constitucional—. Pero también hay quienes consideran que un déficit en torno al 2-3% del PBI es sostenible y puede incluso conducir, dependiendo del destino y eficacia del gasto público, a mejorar las posibilidades futuras de crecimiento (p. 23).

El caso es que Segura no se pronuncia sobre si España debe simplemente cumplir la condición de Maastricht de un déficit presupuestario de 3% del PIB (4,4% en 1991) o, por el contrario, como afirma el gobierno en su plan de convergencia, llegar hasta un 1%. ¿Será esto último posible? ¿Es recomendable para un país como éste que carece de buenas infraestructuras?

Un aspecto relacionado con éste es, dada la obligación de reducir el déficit presupuestario, la forma de hacerlo. Segura parece optar por la reducción de gastos, aunque afirma que es una opción cuando menos arriesgada disminuir los gastos en infraestructuras, cuya carencia relativa es uno de los factores que más limitan la competitividad española (p. 60). ¿No cabría plantearse la posibilidad de reducir el déficit por la vía del incremento de la presión fiscal y no sólo de la global, por la progresividad del sistema y la lucha contra el fraude, como contempla el plan de convergencia del gobierno, sino

también de la individual, especialmente en el impuesto sobre sociedades? La alternativa es recortar gastos en infraestructuras, lo que puede ser contraproducente, y en provisión de servicios públicos y protección, lo que sin duda no sería socialmente justo.

Una tercera apreciación crítica es la que se refiere al papel de los sindicatos. Para Segura, tienen un «inevitable carácter corporativo», por cuanto defienden exclusivamente los intereses de quienes tienen un puesto de trabajo indefinido (p. 66). Afirmación contundente y discutible, sobre todo a raíz de la movilización reciente de las organizaciones sindicales contra el «decretazo» de reducción de la protección por desempleo.

Por último, se echa en falta una referencia a los principales sectores en los que debe incidir la política industrial (minería, siderurgia, construcción naval, etc.), tema que el autor conoce bien y que hubiese sido interesante plantear en el discurso. Pero en fin, no se puede pedir todo y hay que reconocer que tal asunto fue excelentemente tratado en un texto anterior del autor (J. Segura y otros, *La industria española en la crisis, 1978/1984*, Alianza Ed., Madrid, 1989).

En síntesis, *la industria española y la competitividad* es un excelente trabajo, recomendable tanto a neófitos como a expertos. Es de aplaudir la iniciativa editorial de poner a disposición del gran público un texto que, de no haberse publicado, no habría obtenido la atención que merece.

**Pablo Bustelo**

Pedro FRAILE: *Industrialización y grupos de presión. La economía política de la protección en España, 1900-1950*, Madrid, Alianza Universidad, 1991, 232 páginas.

Pedro Fraile Balbín fue catedrático de Historia Económica en la Escuela Universitaria de Estudios Empresariales de la Universidad Complutense de Madrid durante algún tiempo. Los que tuvimos ocasión de conocerle entonces nos vimos sorprendidos, y hasta cierto punto desconcertados, por su enorme afición a la polémica científica. Su larga formación en la Universidad norteamericana le habían legado un carácter abierto y crítico que, desgraciadamente, en este país nuestro es raramente aceptado y valorado.

Todo esto viene al caso, porque en 1991 vio la luz un ambicioso proyecto en el que el profesor Fraile había trabajado desde hacía, al menos, una década. Se trataba de dar una explicación nueva del fracaso de la industrialización moderna en España, y su punto de vista era nuevo porque frente las tradicionales explicaciones basadas en las limitaciones de los llamados factores de demanda (población, desarrollo agrícola), Fraile quería insistir en la fuerza explicativa de los factores de oferta.

De alguna manera, este cambio de perspectiva ya había sido adoptado por los estudiosos de la Revolución Industrial europea desde finales de la década de 1970. La historia económica no pudo sustraerse al cambio de paradigma en Economía, ocurrido simultáneamente, que hizo batirse en retirada a los *demand-side economics* keynesianos frente a los nuevos *supply-side economics*. Y aunque las explicaciones de los historiadores económicos no son tan radicales como las de sus compañeros de profesión, los economistas, no han podido dejar de verse influidas por la poderosa visión que se deriva